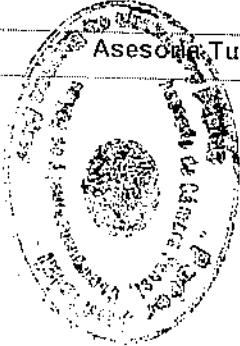




Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio Público Tutelar

Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas



c. 12516-01- CC/15

" Aquino Mongez, Elaido Manuel s/art.149 bis del CP "

Sala II

Señores Jueces de Cámara:

Ariel Santiago Sáenz Tejeira, Asesor Tutelar interino ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas conforme la Resolución AGT N° 280/2015 del día 6/7/2015, ante V.E. me presento y respetuosamente digo:

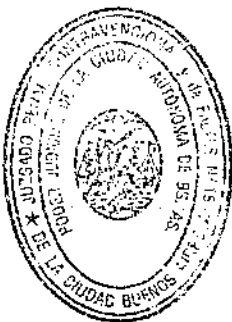
I. OBJETO

Vienen estos autos en vista en los términos del art. 282 del CPPCABA en orden al recurso de apelación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial interina a cargo de la Defensoría Oficial N° 16 contra los fundamentos y la decisión adoptada por escrito el día 15 de julio del 2015 después de haber sido sustanciada la audiencia de cese de medidas restrictivas.

En dicha oportunidad, la Sra. Jueza a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, resolvió: I. Ordenar el inmediato traslado por el SAME del imputado al Hospital Torcuato Alvear; II. Ordenar la evaluación del imputado por parte de un equipo interdisciplinario en los términos de la Ley N° 26.657; III. Mantener las medidas restrictivas impuestas oportunamente; y IV. Arbitrar los medios necesarios para que se les otorgue a las víctimas el botón anti-pánico.

CERTIFICO: Que es copia fiel de su original que en este acto tengo a la vista. CONSTE.

Secretaría, 15 de Septiembre de 2015



Ministerio Público Tutelar
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Juan Martín Pacin
Prosecretario Coadyuvante

Florida 15 Piso 7° - Tel. 5297- 8088/8087

II. LEGITIMACIÓN

Corresponde que dictamine en esta instancia con relación a los intereses de del Sr. Eladio Manuel Aquino Monges, por quien la Asesoría Tutelar N° 1 tomó oportuna intervención (cf. ley 26.657; art. 53, ley 1903; Res. AGT N° 57/09).

III. ADMISIBILIDAD

El recurso de apelación resulta admisible toda vez que cumple con los requisitos que exigen los artículos 198, 267, 269 y 279 del CPPCABA.

IV. FUNDAMENTOS

De manera inicial, adelanto que comparto los argumentos vertidos por la Defensoría Oficial y que habré de solicitar se revoque por contrario imperio la resolución dictada el día 15 de Julio del corriente.

En primer término, por razones de orden expositivo, habré de tratar el agravio vinculado con la arbitrariedad de la fundamentación que fuera introducida en los puntos g) y h) del recurso de apelación interpuesto.

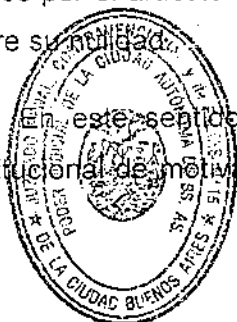
Ello, habida cuenta que los agravios ligados con la omisión para homologar el archivo dispuesto, la decisión de mantener las medidas restrictivas y la orden de traslado del imputado para ser evaluado por un equipo interdisciplinario en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental (Ley N° 26.657) se relacionan de manera directa con la motivación de la resolución en crisis y serán abordados más adelante.

A.- Hecha esta aclaración, considero como adelanté que la decisión adoptada por la Sra. Juez, resulta arbitraria porque carece de una motivación suficiente en los términos exigidos por el artículo 42, inciso 2) del CPPCABA, y en consecuencia, corresponde que se declare su nulidad.

En este sentido, la norma citada constituye una reglamentación de la exigencia constitucional de motivar todos los actos de gobierno, del cual los jueces como integrantes original, que en este acto tengo a la

vista. CONSTE.

Secretaría, 15 de Septiembre de 2015



Juan Martín Pacín
Juan Martín Pacín
Prosecretario Coadyuvante



Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio Público Tutelar

Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas

del poder judicial forman parte, y además una derivación lógica de la asunción por parte del estado argentino de la forma representativa, republicana y federal (art. 1° de la CN).

En consecuencia, la falta de una motivación suficiente o la existencia de una fundamentación aparente, acarrea como consecuencia jurídica inmediata, la declaración de nulidad de la resolución recurrida.

Además, la resolución cuestionada no puede ser subsanada porque se encuentran comprometidas las garantías constitucionales de imparcialidad, sistema acusatorio, igualdad de armas, defensa en juicio y debido proceso legal (art. 18 de la CN y art. 13 de la CCABA).

En efecto, conforme se desprende del acta en donde se dejó constancia de la audiencia de cese de medidas cautelares (art. 186 del CPPCABA) del día 15 de Julio del 2015, la Sra. Juez reconoció haber mantenido una charla informal de carácter previo a la sustanciación de la audiencia con la Sra. Fiscal acerca de la forma de implementación de la medida restrictiva y ambas habrían coincidido en adoptar la posición de la Fiscalía.

No obstante ello, conforme se desprende del acta, la Sra. Juez explicó que en virtud de su preocupación por el caso, se habría visto obligada a dialogar nuevamente con la Sra. Fiscal e incluso con la Sra. Secretaria de la Fiscalía actuante "para ver como implementaban las medidas restrictivas".

A su vez, la Sra. Juez habría afirmado que por tratarse de un caso de suma gravedad e incluso a riesgo de vulnerar el principio acusatorio, su preocupación la habría llevado a comunicarse nuevamente y por medio de mensajes de texto desde su teléfono móvil con la Sra. Fiscal, circunstancia que por lo general no realiza habitualmente con ningún otro operador judicial.

Finalmente, la Sra. Juez informó en la misma audiencia que las conversaciones con la Fiscalía no quedaron registradas, pero que efectivamente existieron.

original que en este acto tengo a la vista. CONSTE.

Secretaría, 15 de Septiembre de 2015



Juan Martín Pacin
Prosecretario Coadyuvante

Ahora bien, conforme se desprende del acta donde consta la audiencia de cese de las medidas restrictivas (art. 186 del CPPCABA) la Sra. Juez interviniente, reconoció haber intercambiado opiniones con la Sra. Fiscal y con la Sra. Secretaria de la Fiscalía en virtud de lo que podría considerarse como una preocupación genuina por la solución y por la forma de articulación de un caso complejo.

Sin embargo, dichas instancias de diálogo o de consulta entre la Sra. Juez y la Sra. Fiscal o la Sra. Secretaria de la Fiscalía, afectan la decisión adoptada.

De hecho, conforme se desprende del acta aludida, durante varios de sus pasajes, la defensa pública hizo especial hincapié, en que la Sra. Juez habría adoptado la decisión antes de la audiencia.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el conocido precedente "Llerena" (CSJN, 17/5/05, LL, 2005-C-557) estableció que la garantía de imparcialidad ampara al justiciable cuando este puede tener algún temor de parcialidad del juez por hechos objetivos del procedimiento.

Incluso el máximo tribunal estableció que aun sin sospechar que el juez pudiese albergar algún interés concreto en el resultado del juicio, el imputado se encuentra habilitado a considerar que el juez actuante puede tener un prejuicio sobre el tema a decidir.

En consecuencia, considero que le asiste razón a la defensa pública cuando cuestiona la decisión recurrida con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad, habida cuenta que la existencia de un intercambio de opiniones y consideraciones entre la Sra. Juez y la Sra. Fiscal en ausencia de las restantes partes, prueba el temor de parcialidad aludido y desacredita la decisión recurrida.

En virtud de ello, cabe recordar que la doctrina de la arbitrariedad recogida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, comprende los casos en los cuales aun cuando existe una fundamentación de la resolución, la misma resulta solo aparente.

En el presente caso, existe un temor fundado de que la Sra. Juez formó su criterio para decidir en el asunto, antes de la audiencia y producto del intercambio con la Fiscalía.

CERTIFICO: Que es copia fiel de su original que en este acto tengo a la vista. CONSTE.

Secretaría, 15 de Septiembre de 2015.



Juan Martín Pacín
Prosecretario Coadyuvante



Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio Público Tutelar

Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas

Esta circunstancia, ha afectado la garantía del debido proceso legal, toda vez que la garantía de imparcialidad, la garantía de igualdad de armas y la garantía de defensa en juicio (art. 18 de la CN y art. 13 de la CCABA) constituyen los pilares sobre los cuales se asienta la validez y legitimidad del sistema acusatorio.

En este sentido, la audiencia oral, pública y contradictoria que constituye el proceso de conocimiento previo y determinante para arribar a una decisión, se ha tornado en una ficción desde el momento en que la Sra. Juez mantuvo (circunstancia que no se encuentra controvertida) distintas conversaciones de manera unilateral con la Fiscalía.

Obsérvese que la situación descripta, trasciende el mero conocimiento del caso (recuérdese que la Sra. Juez había intervenido previamente en la convalidación de las medidas restrictivas) para implicar una forma prejuicio. De hecho, la Sra. Juez desdobló el proceso de toma de decisión, en dos momentos, el primero con la Fiscalía y el segundo en audiencia con presencia de las partes, no obstante lo cual, la suerte ya estaba echada.

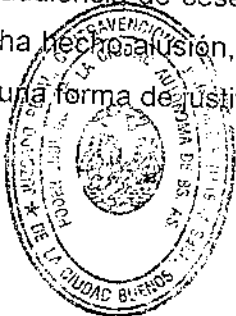
Estas circunstancias analizadas en su conjunto nos permiten afirmar, como lo sostuvo la defensa pública, que la resolución es arbitraria, toda vez que no constituye una derivación razonada de la cuestión debatida en la audiencia.

En consecuencia, la decisión adoptada no constituye un acto judicial válido y por ende, corresponde postular la nulidad de la audiencia de cese de medidas restrictivas y de la resolución dictada y disponer la intervención de un/a nuevo/a magistrado para resolver todos los planteos formulados por las partes.

B. En segundo lugar, considero importante destacar que tanto en el acta de audiencia de cese de las medidas restrictivas como en la resolución recurrida, la Sra. Juez ha hecho alusión, en reiteradas oportunidades, al argumento de la gravedad del caso como una forma de justificación para el dictado del auto.

CERTIFICO: Que es copia fiel de su original que en este acto tengo a la vista. CONSTE.

Secretaría, 15 de Septiembre de 2015



[Firma manuscrita]

En este sentido, las constancias del legajo, dan cuenta que el día 23 de Junio del corriente, la Sra. Josefina Adelaida González radicó una denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, oportunidad en la cual se efectuó un informe interdisciplinario que determinó la existencia de un riesgo altísimo (fs.7/9) y ese mismo día, se ordenó la extracción de testimonios a la Fiscalía General e intervino por primera vez (23/6/2015) el Juzgado Nacional en lo Civil N° 8 (ver fs. 10).

No obstante ello, una vez recibido el legajo en la Fiscalía General, el día 23 de Junio del corriente, la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo de la Fiscalía General, se limitó a ponerse en contacto con la denunciante y a informarle acerca de la posibilidad de contar con el denominado "móvil 100" de la comisaría más cercana a su domicilio.

Es decir, no obstante el altísimo nivel de riesgo del caso, la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo de la Fiscalía General de la CABA, no cumplió con los recaudos de las Resoluciones FG N° 16/2010 y FG N° 531/12, que establecen la obligación de entrevistarse de manera inmediata con la víctima, la producción de un informe de evaluación de riesgo y la solicitud de alguna de las medidas de protección (art. 37, inciso c) del CPPCABA).

Obsérvese que la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo de la Fiscalía General de la CABA, cuenta entre sus múltiples funciones, con la posibilidad de proveer a la víctima de una asistencia integral, que comprende también una asistencia de carácter económica. En particular, me refiero a la caja económica de emergencia, que en casos como el presente puede utilizarse para garantizar que la víctima pueda alojarse en un lugar seguro mientras se produce la sustanciación del proceso.

Es más, ni siquiera le fue asignado un botón anti-pánico, para cuyo otorgamiento existe un protocolo específico y tampoco se gestionó siquiera una consigna policial o una custodia (art. 37, inciso c) del CPPCABA).

Hago estas aclaraciones, habida cuenta que la gravedad y complejidad del caso estuvieron presentes desde un comienzo y que pese a ello, la única medida de protección de la víctima se limitó al citado "móvil 100" de la Comisaría 12° de la PFA.

En consecuencia, la falta de medidas de protección, la existencia de un caso de altísimo nivel de riesgo y la falta de gestión y utilización de los recursos disponibles, preocupa habida cuenta que el estado argentino al suscribir la Convención Interamericana original que en este acto tengo a la vista. CONSTE.

Secretaría, 15 de Septiembre de 2015

Juan Martín Pechi
Prosecretario Coadyuante



Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio Público Tutelar

Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) asumió la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir e investigar los hechos caracterizados como de violencia de género.

En este sentido, la Ley de Protección Integral a las Mujeres (Ley 26.485) establece expresamente la obligación de disponer, en este tipo de casos, las medidas de protección adecuadas para garantizar la seguridad de la víctima.

Dé hecho, en el fallo "González y otras ("Campo Algodonero") vs. México" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el Informe N° 54/01 (Caso 12.051) "María Da Penha Maia Fernández" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se condenó y declaró la responsabilidad de la República de México y de la República del Brasil, habida cuenta que sus agentes, no habrían actuado con la debida diligencia para prevenir, investigar y erradicar cualquier forma de violencia contra la mujer.

Cabe destacar que la normativa convencional y legal citada así como el precedente y el informe aludidos, han sido sucesivamente citados en reiterados precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Góngora") y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ("Taranco", "Newbery Greve" y "Rial") habida cuenta la importancia de la cuestión.

Por ende, considero que no se han garantizado y ni siquiera gestionado, ninguna de las medidas de protección e incluso fueron descartadas en el interlocutorio en crisis, sin haberlas siquiera intentado instrumentarlas.

Esta situación pone en evidencia, que el nivel de riesgo del caso, no condice con las medidas de protección ordenadas en el legajo, razón por la cual, insisto en que resulta indispensable garantizarlas de manera urgente, con prescindencia del planteo de nulidad.

En este sentido, le asiste razón a la recurrente, cuando se agravia en orden a la decisión de mantener la medida restrictiva, sobre todo, porque además del pedido de original que en este acto tengo a la vista. CONSTE.

Secretaría, 15 de Septiembre de 2015.



[Firma manuscrita]

archivo por inimputabilidad, la decisión se hace eco de la ausencia de medidas de protección, de la gravedad del caso e intenta garantizarla solo formalmente. De hecho, no existe ninguna constancia o informe acerca del control de la medida restrictiva.

C. De hecho, el día 1 de Julio del corriente, el Sr. Eladio Manuel Aquino Monges se presentó en la Fiscalía actuante y prestó declaración en calidad de imputado (art. 161 del CPPCABA) oportunidad en la cual, la Sra. Fiscal interviniente acordó con la recurrente una prohibición de acercamiento por un radio de doscientos (200) metros al domicilio de Adelaida Josefina González y Rita Manuel González sito en la Av. Juan Bautista Alberdi N° 555, piso 6°, departamento "B" de esta ciudad y una prohibición de contacto con Adelaida Josefina González, Rita Manuela González y Gloria Cefarino González (art. 174 del CPPABA).

Acto seguido, la Sra. Fiscal actuante, remitió las actuaciones a la Sra. Juez interviniente y solicitó la convalidación de la medida restrictiva, quién el día 6 de Julio del corriente resolvió prescindir de la audiencia establecida para convalidar la medida y resolver directamente en virtud del compromiso asumido por el imputado en la audiencia del art. 161 del CPPCABA (fs. 42/3).

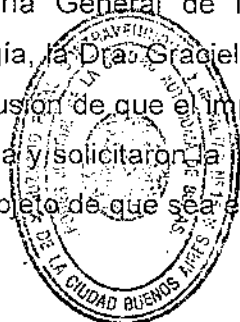
En este sentido, obsérvese que incluso la resolución por la cual se convalidó la medida restrictiva, extendió el alcance de la prohibición de acercamiento a trescientos (300) metros del domicilio establecido, sin que las partes cuestionaran esa decisión y sin haber dispuesto hasta ese momento ninguna medida de protección a la víctima.

Ahora bien, y creo sin temor a equivocarme, que la decisión adoptada resulta también arbitraria como lo señala la recurrente, en una gran medida debido a la constancia del día 3 de Julio del corriente, incorporada al legajo sin firma de ningún funcionario público.

Veamos. Ese día, a instancia de la defensa pública, el Sr. Eladio Manuel Aquino Monges realizó un informe médico con la intervención del médico psiquiatra de la Defensoría General de la CABA, la Dra. Blanca Huggelman y de la Licenciada en Psicología, la Dra. Graciela Diletto (ver fs.50) quienes en forma conjunta habrían arribado a la conclusión de que el imputado habría resultado peligroso para terceros, en particular para la víctima y solicitaron la intervención del S.A.M.E. para "el inmediato traslado del imputado con el objeto de que sea evaluado en los términos de la Ley de Salud Mental" (fs.50).

CERTIFICO: Que es copia fiel de su original que en este acto tengo a la vista. CONSTE.

Secretaría, 15 de Septiembre de 2015.



[Signature]
Prosecretario Coadyuvante



Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio Público Tutelar

Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas

No obstante ello, se determinó a su vez que el imputado no pudo comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones, razón por la cual, la Sra. Fiscal ese mismo día remitió las actuaciones a la Sra. Juez interviniente con un dictamen de archivo por inimputabilidad (art. 199, inciso c) del CPPCABA), el pedido de convalidación de dicha decisión y una solicitud de extracción de testimonios a la Justicia Nacional en lo Civil en orden a la peligrosidad del imputado para sí y terceros (Ley N° 26.485 y Ley N° 26.657).

Paradójicamente, no obstante la gravedad del caso, la Sra. Juez interviniente, rechazó la remisión efectuada por la Fiscalía a través de un decreto a mano alzada del día 6 de Julio del 2015 después de las 14:35 horas en virtud de la finalización del horario de atención al público de la Justicia Nacional en lo Civil (ver fs. 57 vuelta).

Devueltas las actuaciones, la Sra. Fiscal actuante extrajo testimonios a la Justicia Nacional en lo Civil y remitió las actuaciones al Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas solicitando se convalide el archivo por inimputabilidad.

Finalmente, la Sra. Fiscal solicitó que se mantuviera la medida restrictiva pese al pedido de archivo de las actuaciones por inimputabilidad, hasta tanto intervenga efectivamente la Justicia Nacional en lo Civil (fs. 62).

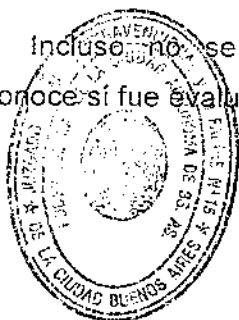
Esto último, motivó el pedido de cese de la medida restrictiva el cual originó la audiencia y la posterior decisión que la defensa pública razonablemente cuestiona.

D. Ahora bien, resulta llamativo que de las constancias del legajo, no surja que paso con el traslado del Sr. Eladio Manuel Aquino Monges ordenado por la Dra. Graciela Diletto del Cuerpo de Investigación Judiciales de la Fiscalía General de la CABA y menos aún, si dicho traslado se produjo con conocimiento o no de la Sra. Juez actuante (ver fs.50/2).

Incluso, no se encuentra acompañada ninguna constancias del S.A.M.E., se desconoce si fue evaluado y si existió o no criterio de internación.

CERTIFICO: Que es copia fiel de su original que en este acto tengo a la vista. CONSTE.

Secretaría, 15 de septiembre de 2015.



Prosecretario Coadyuvante

Tampoco se encuentra acreditado que el Sr. Eladio Manuel Aquino Monges fuera trasladado por orden de la Sra. Juez actuante en virtud de algún episodio que podría haber ocurrido en la defensoría pública mientras se desarrollaba el informe.

En cambio, podemos confirmar, habida cuenta la parte dispositiva de la resolución en crisis que la Sra. Juez ordenó un nuevo "traslado" con el objeto de que sea evaluado por un servicio de salud mental.

Llegado este punto, lo que sabemos de manera fehaciente es que el imputado estuvo presente, que compareció conforme fuera citado el día 3 de Julio del corriente a la Fiscalía donde se le recibió declaración en los términos del artículo 161 del CPPCABA (ver fs.37/9) y que ese mismo día, a instancias de la recurrente, realizaron un informe médico junto a la defensoría pública interviniente desde donde se ordenó su traslado para ser evaluado (fs.50).

Desde entonces se desconoce el resultado de aquella medida y comenzaron las idas y vueltas del legajo, los planteos en orden a la medida restrictiva y la falta de convalidación del archivó por inimputabilidad.

No obstante ello, no se ordenó ninguna medida de protección para la víctima (consigna, custodia, botón de pánico o traslado de la víctima a un lugar seguro).

E. En este sentido, a riesgo de resultar reiterativo, cabe destacar que la resolución recurrida no solo carece de fundamentación sino que además resulta fácticamente imposible, toda vez que el imputado se encuentra en libertad en este proceso, razón por la cual, no es posible disponer su traslado compulsivo.

En este sentido, de las constancias de la causa surge una constatación del domicilio del imputado del día 16 de Julio del corriente, con lo cual, existe la posibilidad hipotética que la decisión podría haber sido concebida para ser ejecutada en la vía pública.

En ese hipotético caso, es importante puntualizar, que no se verifica ninguno de los presupuestos indispensables para disponer una medida de coerción de estas características, que con prescindencia de su denominación, debe estar justificada. Veamos.

original que en este acto tengo a la vista. CONSTE.

Secretaría, 15 de Septiembre de 2015



Juan Martín Pacin
Prosecretario Coadyuvante



Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio Público Tutelar

Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas

En primer lugar, a diferencia de la Fiscalía, considero que no se verifican los supuestos para la procedencia de una internación de carácter penal, me refiero a la medida de seguridad establecida en el artículo 34 del Código Penal, básicamente por no existe una declaración de inimputabilidad, requisito ineludible para que un juez penal pueda disponer una internación de esas características.

En efecto, aun cuando la Fiscalía, solicitó el archivo de las actuaciones por inimputabilidad (art. 199, inciso c) del CPPCABA), la Sra. Juez interviniente no se ha expedido al respecto y la resolución en crisis la ha rechazado expresamente, en la inteligencia que resulta necesario efectuar una nueva evaluación.

En este sentido, considero que le asiste razón a la magistrada, habida cuenta que el informe médico de fojas 51/2, no resulta del todo completo, además de presentar algunas contradicciones, sobre todo en lo que hace al punto central, la peligrosidad para sí mismo o para terceros. Resulta determinante para efectuar el cotejo, la constancia agregada y sin firmar que luce a fojas 50 y los agregados que presentan las conclusiones del informe.

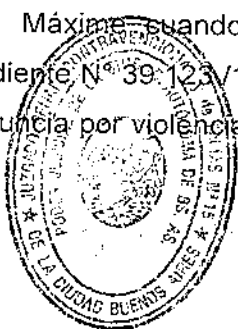
En segundo lugar, tampoco estamos frente a un supuesto de internación involuntaria en los términos del artículo 20 de la Ley N° 26.657, habida cuenta que además de la imprecisión y de las partes testadas el informe médico, no fue realizado por quienes se encuentran a cargo del servicio de internación (a), no existe precisión acerca del tipo de riesgo y su extensión (a) y no se ha descartado la existencia de otro tratamiento eficaz (b).

En consecuencia, el informe médico obrante a fs. 51/2, tampoco cumple con los parámetros previsto en dicha norma, razón por la cual, la medida implementada, no se compadece con una internación de estas características.

Máxime cuando además, conforme se desprende del acta de audiencia, en el expediente N° 39.123/15 caratulado "González, Adelaida Josefina c/ Aquino Monges, Eladio s/denuncia por violencia familiar", se tiene presente el Juzgado Nacional en lo Civil N° 8, el

original que en este acto tengo a la vista. CONSTE.

Secretaría, 15 de Septiembre de 2015



Juan Martín [Firma]
Prosecretario Coadyuvante

día 26 de Junio del corriente, se dispuso la realización de una entrevista en el Cuerpo Interdisciplinario de Protección Contra la Violencia Familiar, se ordenó otra prohibición de acercamiento y la intervención del Asesor de Menores e Incapaces.

En este sentido, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha adoptado estas pautas para diferenciar los distintos régimen de internación involuntaria en el fallo "Antuña" del día 13 de Noviembre del 2012, oportunidad en la cual, el alto tribunal, hizo propios los argumentos del Sr. Procurador General de la Nación.

En tercer orden, debo descartar que tampoco estamos ante un supuesto de detención y traslado compulsivo, no solo porque dicha medida de coerción requiere una serie de presupuestos fácticos para su procedencia, como es el caso del peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación, que la Fiscalía no ha probado.

Además, la medida restrictiva aún vigente, se encuentra directamente ligada a impedir riesgos procesales, básicamente el contacto con la víctima y sus hijas, únicos testigos de los hechos investigados en autos, no obstante además que la Sra. Fiscal, ha solicitado el archivo del caso por inimputabilidad (art. 199, inciso c) del CPPCABA).

Ahora bien, una medida como la ordenada, debe superar el estándar de proporcionalidad para estar justificada, es decir, la que existe entre la finalidad perseguida y el medio utilizado (art. 28 de la CN).

En este sentido, el medio utilizado parece claro, es decir, interceptar al imputado en la vía pública y trasladarlo a un servicio de salud mental para su posterior evaluación.

En cambio, la finalidad que se persigue con la utilización de esa medida, resulta por demás confusa, habida cuenta que los motivos que se exponen en la decisión cuestionada se encuentran ligados principalmente a la protección de la víctima, circunstancia que resulta indispensable y esencial en el marco del proceso pero que en modo alguno justifica el dictado de una decisión de estas características, en la medida en que no se hubieran agotado todas las medidas de protección o bien que se encuentre debidamente acreditado que han sido gestionadas dichas medidas con resultados infructuosos, cosa que no ha sido probada ni acreditada por la Fiscalía o que existan riesgos procesales, supuesto que tampoco se verifica habida cuenta la vigencia de las medidas restrictivas.

CERTIFICO: Que es copia fiel de su original que en este acto tengo a la vista. CONSTE.

Secretaría, 15 de Septiembre de 2015

Juan Martín Pacin
Prosecretario Coadyuvante



Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio Público Tutelar

Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas

A su vez, existe una meta-finalidad de la decisión, la cual aún cuando no se evidencia con claridad en el interlocutorio podría ser alegada como justificación de una decisión de esas características y me refiero a la situación de riesgo en la que puede encontrarse el imputado con motivo de la afectación que padece.

En este último caso, el estándar de proporcionalidad tampoco se sostiene, máxime cuando el medio utilizado resulta excesivo, toda vez que el Sr. Eladio Manuel Aquino Monges compareció a todas las citaciones cursadas e incluso se ha sometido voluntariamente al informe médico, motivo por el cual, parece razonable que el nombrado pueda ser intimado a presentarse en algún servicio de salud mental con el objeto de que pueda ser debidamente evaluado con aviso al Juzgado Nacional en lo Civil N° 8.

En consecuencia, hasta tanto dicha entrevista se cumpla, resulta indispensable que la Sra. Fiscal, ordene las medidas de protección para la víctima que resulten necesarias.

V. PETITORIO

Por todo lo expuesto solicito:

Se haga lugar al recurso de apelación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial y al presente recurso de adhesión, y se revoque la resolución recurrida.

Asesoría de Cámara, 31 de Julio de 2015.

Dictamen N° /15



[Firma manuscrita]

Aniel Sáenz Tejero
(Pz. AGT N° 280/2015)

[Firma manuscrita]
Juan Martín León

